

formas registradas en las últimas décadas en el Estado, en el sistema de partidos y en la electoral mexicanos han recibido considerable atención de gran número de especialistas. No ha sucedido lo mismo con los cambios en las formas de organización y participación de la sociedad, lo que ha redundado en una visión sesgada del proceso de democracia y de las perspectivas de consolidación democrática en el México contemporáneo.

Este volumen, que incluye los trabajos presentados en agosto de 2000 durante el seminario nacional sobre las organizaciones civiles en México: antecedentes, situación actual, perspectivas futuras, aborda la dimensión asociativa de la sociedad civil mexicana y busca esclarecer cuestiones cuantitativas, el marco jurídico que regula sus actividades, sus antecedentes históricos, los significativos, las experiencias de formación de redes temáticas, el uso que le dan a las tecnologías, sus relaciones con partidos políticos, con gobiernos, con instituciones académicas y religiosas, con movimientos sociales, con redes transnacionales de solidaridad. Además de ubicarnos en el debate teórico contemporáneo. Este volumen marca un hito en relación con otros que han centrado su atención en los cambios legales, profesionales e institucionales de la transición a la democracia para documentar y analizar la forma como la política institucional se combina con la no institucional para provocar avances democráticos en nuestro país.

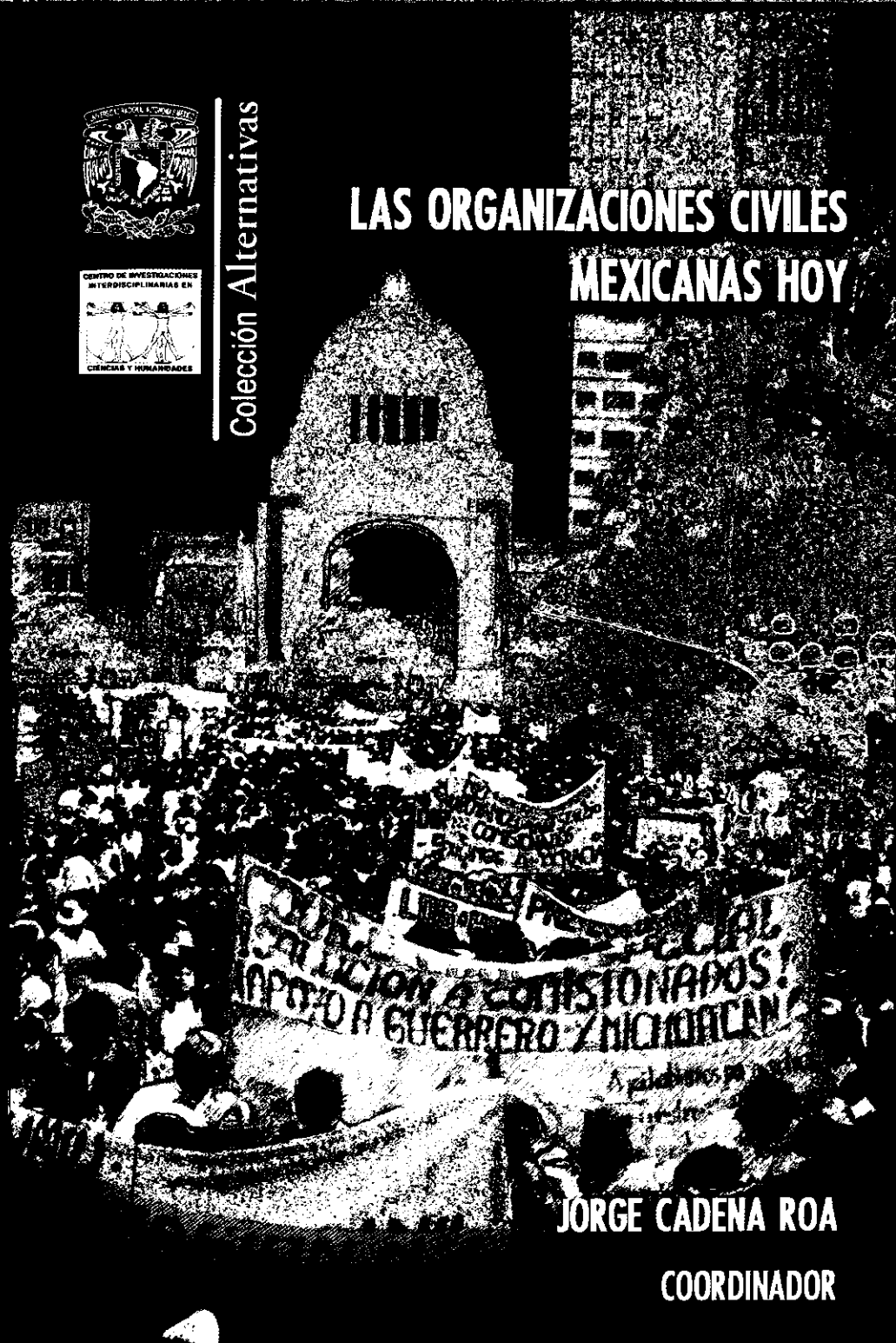


Colección Alternativas

# LAS ORGANIZACIONES CIVILES MEXICANAS HOY

JORGE CADENA ROA (coordinador)

LAS ORGANIZACIONES CIVILES MEXICANAS HOY



JORGE CADENA ROA  
COORDINADOR

50 AÑOS DE  
AUTONOMÍA  
INDEPENDIENTE  
UNAM



Primera edición, 2004

D.R. © 2004, Universidad Nacional Autónoma de México  
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias  
en Ciencias y Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.

Impreso en México / *Printed in Mexico*  
ISBN 970-32-1318-9

- Magdalena Hernández.** Técnico Académico del CEIICH-UNAM.  
[hervil@servidor.unam.mx](mailto:hervil@servidor.unam.mx)
- Marie-Josée Massicotte.** Candidata a Doctor por la Universidad de York, Canadá. [massicot@yorku.ca](mailto:massicot@yorku.ca)
- Hermelinda Mendoza.** Técnico Académico del CEIICH-UNAM.  
[hmendoza@servidor.unam.mx](mailto:hmendoza@servidor.unam.mx)
- Alberto Olvera.** Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-Universidad Veracruzana. [olvera@dino.cocade.uv.mx](mailto:olvera@dino.cocade.uv.mx)
- Rafael Reygadas.** Profesor-Investigador de la UAM-Xochimilco.  
[reygadas@laneta.apc.org](mailto:reygadas@laneta.apc.org)
- Ligia Tavera Fenollosa.** Profesora-Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México. [ligia@flacso.flacso.edu.mx](mailto:ligia@flacso.flacso.edu.mx)

## Índice

<b>Introducción</b>	7
<i>Jorge Cadena Roa</i>	
<b>El debate teórico y los datos</b>	21
Representaciones e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil	23
<i>Alberto J. Olvera</i>	
La disputa teórica sobre las organizaciones civiles. Un asunto político-ideológico	49
<i>Manuel Canto Chac</i>	
Dimensiones cuantitativas de las organizaciones civiles en México	73
<i>Miriam Calvillo Velasco y Alejandro Favela Gavia</i>	
<b>El marco jurídico y las estructuras de movilización</b>	121
La regulación jurídica de las organizaciones civiles en México: en busca de la participación democrática	123
<i>Diana Margarita Favela Gavia</i>	
¿Qué hay de nuevo con las redes mexicanas de organizaciones civiles?	155
<i>Jorge Cadena Roa</i>	
Formas de articulación y coordinación entre organizaciones civiles	189
<i>Rafael Reygadas Robles Gil</i>	

Partidos opositores de izquierda y organizaciones de la sociedad civil <i>Jorge Alonso</i>	215
<b>Las nuevas tecnologías de comunicación</b>	251
El uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones sociales <i>Adolfo Dunayevich</i>	253
Creando redes electrónicas desde y para la sociedad civil <i>Ligia Tavera Fenollosa</i>	269
<b>Algunas experiencias recientes</b>	299
Las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de la Ciudad de México <i>Lucía Álvarez Enriquez</i>	301
Relaciones de las organizaciones civiles con los gobiernos locales <i>Laura Becerra Pozos</i>	321
Organizaciones civiles e instituciones internacionales <i>Emilienne de León Aulina</i>	331
Las organizaciones civiles y sociales mexicanas en las redes transnacionales <i>Marie-Josée Massicotte</i>	347
Las organizaciones civiles en México: una bibliografía comentada <i>Magdalena Hernández</i> <i>Hermelinda Mendoza</i> <i>Antonio Franco</i>	387
Bibliografía general	403
Índice de autores	421

*Las organizaciones civiles mexicanas hoy,* de Jorge Cadena Roa (coordinador), se terminó de formar e imprimir en la ciudad de México durante el mes de mayo de 2004, en los talleres de S y G Editores, S.A. de C.V., Cuapinol 52, Col. Santo Domingo de los Reyes, 04369 Coyoacán. En su composición se utilizaron tipos Baskerville de 12, 10, 8 y 6 puntos. El tiro fue de 500 ejemplares más sobrantes para reposición sobre papel cultural de 90 gr. La lectura de pruebas estuvo a cargo de Magdalena Hernández Vilchis y Juan Francisco Escalona Alarcón y el diseño de la portada, de Lorena Salcedo Bandala

## **Partidos opositores de izquierda y organizaciones de la sociedad civil**

*Jorge Alonso*

Se pretende dar una visión panorámica, muy sintética, de la historia de la relación entre los principales partidos políticos de izquierda en México y organizaciones de la sociedad civil. Se resaltarán la coyuntura de las elecciones del año 2000, y se hará una discusión teórica de dicha relación.

### **HISTORIA DE RELACIONES TORMENTOSAS**

En los años veinte muchos movimientos locales se vieron convertidos en partidos regionales controlados por líderes. El Partido Comunista (PC) se ligó a grupos de sindicalistas, campesinos e inquilinos. El partido fundado por Calles quería integrar los liderazgos regionales en una organización en la que se disputaran puestos de elección popular que se repartieran al margen de verdaderas elecciones.<sup>1</sup> Con Cárdenas, los pujantes movimientos obrero y campesino fueron corporativizados en el partido de Estado. Pese a lo totalizante de esta estructura, las contradicciones en los movimientos posibilitó que en los años cuarenta se fueran desprendien-

<sup>1</sup> Los datos de este escrito provienen de la revisión de las entrevistas que realicé con Carlos Sánchez Cárdenas a finales de los setenta y con Miguel Ángel Velasco en varias sesiones en 1984, 1990 y 1994. Los datos de los últimos años del siglo XX pertenecen a notas que fui tomando en reuniones en las que participé con Alianza Cívica y con Poder Ciudadano.

do importantes sectores que dieron vida a un partido encabezado por Lombardo: el Partido Popular. Por su parte, el Partido Acción Nacional nació a finales de los años treinta en contraposición a dicha estructura partidista y alentó una organización de corte ciudadano.

Los continuos fraudes electorales también propiciaron el surgimiento de movimientos cívicos que reivindicaban el triunfo de candidatos opositores. Éstos siempre estaban expuestos a la represión gubernamental. El dos de enero de 1946 el ejército disparó en contra de ciudadanos de la Unión Cívica Leonesa. El PAN apoyó esa lucha que logró la desaparición de poderes en Guanajuato. Sin embargo, a la represión el gobierno priísta añadía otro elemento: la cooptación. Poco después consiguió que la Unión Cívica de León se adhiriera a la campaña presidencial oficialista.

En los años cuarenta, además del partido oficial que tenía el control de las principales organizaciones de trabajadores, campesinos y burócratas, en el escenario nacional actuaban organismos de izquierda que tenían una concepción de partidos de cuadros que debían ganar prestigio y dirección en organizaciones de masas; una gran organización masiva de derecha, sinarquista, con influencias fascistas y que tenía un gran arraigo entre campesinos del Bajío; y el Partido Acción Nacional que pretendía ganar ciudadanos a través de una tarea de ciudadanización. A finales de esa década el régimen quitó el registro tanto al PC como al Partido Sinarquista. Dentro del sinarquismo había una tensión entre los que preferían que se mantuviera como movimiento y los que habían presionado por constituir un partido. Cuando se quedó sin registro, dicha tensión prosiguió en las alianzas puntuales con los panistas.

El descontento por políticas económicas antipopulares propiciaba que se formaran frentes contra de la carestía, apoyados por grupos de izquierda.<sup>2</sup> En 1948 estudiantes antifascistas lideraron la huelga en la UNAM que exigía que se rindieran cuentas sobre los fondos para la construcción de Ciudad Universitaria. Esto contribuyó a la renuncia del rector. También en este movimiento hubo

<sup>2</sup> Este descontento era manifiesto entre organizaciones izquierdistas que encabezaban luchas contra la carestía. Por su parte, la política de menos malestar adoptada por el Estado mexicano mantenía el control de los sectores corporativizados y beneficiados de esa política social.

presencia de agrupaciones de izquierda que pretendían construir un partido alternativo al PC.

A finales de los cuarenta y principios de los cincuenta arreció la represión en contra de quienes intentaran independizarse del control gubernamental. Los sindicatos importantes sufrieron la imposición de líderes afines al gobierno, y la represión de disidentes.

En Acapulco, a mediados de 1954, hubo una movilización cívica que terminó con la caída del gobernador. Al año siguiente otro movimiento popular también hizo caer al gobernador tabasqueño Manuel Bartlett, acusado de aplicar una política de carestía, bajos salarios y despidos en masa. En estas movilizaciones participaban siempre elementos de la izquierda. En 1956 estudiantes del IPN realizaron una huelga. Los partidos de izquierda consideraban que las protestas de estudiantes, maestros y trabajadores no tenían éxito porque estaban desconectados y sin la dirección de un partido revolucionario. En 1958 hubo luchas cívicas contra el PRI en San Luis Potosí, Baja California y Veracruz, apoyadas por partidos opositores. En la lucha ferrocarrilera de 1958-1959 participaron activamente los partidos de izquierda. Cuando vino la represión, dirigentes del PC y del POCM fueron encarcelados. La política antipopular del partido de Estado llenó las cárceles de combatientes populares y de militantes de partidos opositores. En 1959 surgió otro movimiento: el que demandaba la liberación de los presos políticos.

Entre 1959 y 1963 se dio la primera etapa del movimiento navista. A través del PRI un movimiento civil ganó la presidencia municipal de San Luis Potosí en contra de un cacicazgo de Gonzalo N. Santos. En 1961, Nava buscó la gubernatura de su estado a través del PRI, pero éste no lo aceptó como su candidato. Nava compitió de manera independiente apelando a la dignidad y en contra del autoritarismo. El régimen acudió al acostumbrado mecanismo del fraude electoral. Pero como los frentistas protestaron, sobrevino la represión. Nava fue encarcelado y torturado. El ejército ocupó la capital potosina para aplastar el descontento civilista.

En 1961 surgió otro movimiento por la soberanía nacional y la emancipación económica que adoptó el nombre de Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Se dio una dura lucha interna por el control de este nuevo organismo entre dirigentes de partidos de izquierda y los "sin partido". Los dirigentes partidistas se quejaban de que la dirección la tenían estos últimos y que los partidos eran

sólo elementos de apoyo. Los "sin partido" se mostraban satisfechos con el movimiento y parecían menospreciar a los partidos. Quienes dirigían al MLN consideraban que el resentimiento de los partidos se debía a que no dirigían al movimiento. Los partidos se separaron en 1963. Hubo otros desprendimientos y para 1967 el MLN había quedado reducido a un membrete.

En 1965 apareció el movimiento de médicos. Los partidos de izquierda lo apoyaron frente a la cerrazón del gobierno priísta. El movimiento estudiantil y popular de 1968 puso en evidencia y en cuestión al poder gubernamental y a los partidos políticos con registro electoral. A raíz de una intervención violenta de la policía, una pugna estudiantil propició que un soterrado descontento por el deterioro social y político, que había acumulado el ya agotado "milagro mexicano", irrumpiera con fuerza insospechada. Las demandas de los estudiantes, circunscritas inicialmente a la destitución de los jefes policiacos, la extinción del cuerpo represivo de granaderos, la indemnización a las víctimas de la represión, se amplió a reclamos democráticos como la libertad de los presos políticos y la extinción del delito de disolución social. Con este movimiento se desataron grandes manifestaciones de protesta apoyadas por amplios sectores sociales. Las demandas democráticas en un ambiente de autoritarismo gubernamental generaron una crisis política grave. En lugar del diálogo se exacerbó la represión. Para el PPS se trataba de un complot para dividir y enfrentar las fuerzas democráticas en el contexto de la sucesión presidencial. Después de la masacre del dos de octubre, el PRI demandó a los partidos que integraban la Cámara de Diputados que apoyaran las acciones del gobierno, aduciendo que el uso de la fuerza había sido necesario para garantizar la paz. Un diputado del PPS no se plegó y terminó como diputado independiente. El PAN criticó la masacre. El PC volvió a sufrir la represión como diez años atrás.

Ante la represión de estudiantes el jueves de Corpus de 1971 los grupos de izquierda sin registro electoral levantaron la voz. El Movimiento de Acción y Unidad Socialista demandó la disolución y el desarme inmediato de los grupos de choque organizados y financiados por el gobierno. Se exigió el castigo a los culpables.

Del movimiento estudiantil surgieron cuadros que se plantearon la necesidad de ir a las bases populares. Se dio una relación muy activa entre estos cuadros y diversos movimientos sindicales,

urbanos y campesinos. Otra rama prefirió la clandestinidad de la lucha guerrillera urbana.

A finales de noviembre de 1971 se organizó una reunión con estudiantes, maestros, trabajadores, campesinos y ciudadanos sin agrupación para intercambiar opiniones a fin de integrar un organismo político que unificara las luchas de los grupos que se encontraban dispersos. Así nació el Comité Nacional de Auscultación y Coordinación (CNAC). Encabezaron el llamamiento tres ex presos políticos de diferentes épocas (Carlos Sánchez Cárdenas, detenido en una manifestación del primero de mayo de 1951 y primer acusado del delito de disolución social; Demetrio Vallejo, dirigente del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959; Heberto Castillo, preso por su participación en el movimiento de 1968), y el líder del Frente Auténtico del Trabajo, Alfredo Domínguez.

El CNAC pretendía conjuntar grupos, crear nuevas formas de organización, atraer a todas las corrientes y personas a forjar nuevas maneras de hacer política. Posteriormente se propuso formar un nuevo partido. El CNAC se convirtió en CNAO, pues de la consulta se pasó a la organización. De ahí surgieron dos partidos: el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Los organismos populares ligados a esas agrupaciones se fundieron con los nuevos partidos, que fueron contactando movimientos populares (de pobladores urbanos, campesinos y estudiantes) y subsumiéndolos en sus organizaciones.

En 1977 ante el desgaste de los partidos con registro, de los partidos sin registro, grupos populares y el movimiento guerrillero, el gobierno decidió abrir los espacios políticos e instaurar una reforma electoral que posibilitaba el registro condicionado a los resultados de las elecciones federales de 1979. En esta forma recibieron su registro el PST, el PC y el PDM. En 1981 dos organizaciones registradas como asociaciones políticas (el MAUS y el Partido Socialista Revolucionario), más otras dos agrupaciones sin registro (el Partido del Pueblo Mexicano y el MAP) se fusionaron con el PC para dar origen al Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Éste se conectó con diversos movimientos regionales. Con algunos de ellos realizó alianzas electorales. Muchos ex guerrilleros amnistiados a raíz de la reforma política también optaron por organizar un partido que finalmente se fusionó con otras organizaciones, entre ellas la proveniente del PC para dar origen a un partido unido de izquierda.

En el primer lustro de los años ochenta, la crisis económica y el inicio de una política neoliberal desataron un gran número de movimientos urbanos, sindicales independientes y campesinos que fueron constituyendo diversas coordinadoras nacionales defensivas. Hubo un doble movimiento de ellos hacia los partidos de izquierda y de éstos hacia aquéllos. Los líderes populares buscaban espacios en candidaturas electorales; los partidos se iban nutriendo de miembros de esas agrupaciones. Las relaciones nunca fueron tersas.

En 1985, con los sismos de septiembre, surgieron nuevos movimientos urbanos en la Ciudad de México, primero ante el rescate de víctimas y después frente a las tareas de la reconstrucción. Estos nuevos movimientos pronto se plantearon la necesidad de contactarse con los partidos de izquierda. Antes de las elecciones presidenciales de 1988 se propició una nueva fusión de la izquierda que transformó al PSUM en Partido Mexicano Socialista (PMS).

En el PRI se dio una escisión por la falta de democracia para la designación del candidato a la presidencia de la República y se formó la Corriente Democrática. Participó en la campaña presidencial agrupando a varios partidos pequeños bajo la denominación del Frente Democrático Nacional. Al final de la campaña el PSM se adhirió a la candidatura de Cárdenas. Cárdenas ganó, pero el PRI hizo un enorme fraude para impedir ese triunfo. A partir de eso se formó un amplio movimiento plural de grupos y movimientos reclamando la limpieza electoral. Este movimiento devino en la formación del Partido de la Revolución Democrática que surgió en 1989 con el registro del PMS. Se planteaba la creación de un partido ciudadano, pero el conjunto de grupos sociales y políticos que le dieron forma marcaron su configuración. Muchos movimientos que habían hecho alianzas con partidos de izquierda en la década de los ochenta se integraron al nuevo partido. La relación entre grupos y partido se fraguó mediante el reparto de cuotas de puestos de dirección y de elección popular.

Por su parte, en el PAN se dio otra difícil relación entre organismos que lo presionaron desde fuera (como Pro Vida), y de otros que finalmente se fusionaron en la misma estructura partidista (como el DIHAC).

En la década de los noventa surgieron las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en torno a la demanda de la democratiza-

ción y la defensa de los derechos humanos. En procesos electorales locales y federales se fue fraguando una relación tensa entre estas ONGs que demandaban el respeto a su autonomía y el nuevo partido que quería subsumirlas. La salida fue un conjunto de alianzas *de facto*.

La segunda fase navista fue en 1991. En los comicios para gobernador de San Luis Potosí en ese año prevaleció, no sin dificultades y tensiones, una tendencia en pos de la democracia a través de una coalición electoral que agrupaba al Frente Potosino, al PRD, al PDM y al PAN. Este frente resaltó lo ciudadano y defendió el voto de una mayoría de potosinos agraviados por el fraude salinista. El doctor Nava emprendió una caminata de la dignidad que salió de la capital potosina y se dirigía a la ciudad de México. Durante su trayecto fue recibiendo muestras de solidaridad. La opinión nacional e internacional tenía los ojos puestos en esta marcha. Nava dio por terminada la marcha cuando renunció el candidato priísta impuesto. Nava conjuntó personalidades políticas e intelectuales en foros de análisis acerca de la democracia en México. Hombre sin partido enfatizó un reclamo ciudadano. Diversas agrupaciones independientes entre las que destacaban organismos de defensa de los derechos humanos, se dieron a la tarea de considerar al voto como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a realizar actividades específicas de observación de las elecciones y análisis públicos de los comicios. Se conformó el Movimiento Ciudadano por la Democracia encabezado por Nava. Colaboraron con él tanto personas pertenecientes a partidos como ciudadanos sin partido.

En julio de 1994, organizaciones civiles (OCs) se contactaron con candidatos de los partidos para que definieran mecanismos institucionales de articulación entre ONGs y gobierno, para que fueran tomadas en cuenta las voces ciudadanas en la elaboración y seguimiento de las políticas sociales del gobierno. El partido oficial no quiso comprometerse con este movimiento.

Con motivo de las elecciones presidenciales de 1994 un conjunto de agrupamientos de toda índole se reunieron para la observación de los comicios, la defensa del voto y configuraron una organización plural que se denominó Alianza Cívica. Esta organización también fue observando elecciones estatales. Alianza Cívica se planteó la necesidad de contribuir a impulsar la democracia in-



tegral. Se definió como un movimiento y espacio ciudadano de carácter plural e incluyente que convocaba, articulaba y coordinaba la participación ciudadana para la construcción de la democracia en México.

En 1995, en la Ciudad de México, tuvo lugar un encuentro de grupos y OCS a favor de la democratización integral, la vigencia plena de los derechos humanos y por modelos alternativos de desarrollo económico. Se propusieron ampliar la participación en la vida pública y firmaron una carta de derechos ciudadanos. Demandaron candidaturas independientes de los partidos políticos, organismos electorales plenamente independientes, y equidad en las contiendas políticas. Se forjaron nuevas redes flexibles de OCS, buscando una democracia horizontal y plural, y ensayando formas de acción novedosas. No sólo protestaban sino que planteaban soluciones.

Mientras estuvo al frente del PAN, Carlos Castillo Peraza defendía una vieja idea panista de que los organismos intermedios tenían su especificidad social y que cuando intervenían en política o eran simulaciones de otros partidos o que se debían sumar a instancias partidarias para actuar. Cuando llegó a la dirección de ese partido Felipe Calderón, varias OCS independientes se reunieron con él para explicarle su actuación. No competían con los partidos, sino que eran indispensables en la lucha por la democracia.

Con la reforma electoral de 1996 algunas OCS, como Causa Ciudadana, prefirieron adoptar la forma de asociaciones políticas, que de acuerdo con la ley eran agrupaciones que en algún momento se convertirían en partidos. Alianza Cívica, considerando que las luchas cívicas habían conseguido avances en las legislaciones electorales federal y estatales y organismos electorales autónomos y profesionalizados, planteó la necesidad de constituirse también en agrupación política. Hubo una gran discusión en su interior y finalmente ganó la posición de no convertirse en juez y parte de los procesos electorales y proseguir con la observación electoral.

En 1997, Alianza Cívica observó los procesos electorales en 14 estados de la República enfatizando el monitoreo de medios impresos y electrónicos. Con estas actividades Alianza Cívica resaltó que era una organización plural, no gubernamental ni partidista que luchaba por conseguir el desarrollo democrático del país. Alianza ha realizado observación electoral, ha hecho un seguimiento ciudadano de funcionarios públicos, y ha propiciado consultas

ciudadanas sobre temas importantes para la sociedad (la paz en Chiapas la democratización del Distrito Federal, etcétera).

Demandas persistentes de las OCS han sido las relativas a que se introduzcan en la legislación federal las formas de democracia directa (Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular). Esto no ha prosperado por la oposición priísta. Pero en donde ha ido triunfando la oposición (tanto panista como perredista) estas formas han sido introducidas al marco legal. Con ello, los ciudadanos no dependen de los partidos para detener o impulsar leyes, para impedir o avalar decisiones de los ejecutivos estatales y municipales. Ha habido dos experiencias en donde han sido puestas a prueba estas formas directas. En Chihuahua, ciudadanos y panistas trataron de impedir que el PRI en alianza con el PRD echara atrás avances democráticos de la legislación electoral. Sin embargo, con las maniobras de funcionarios del IFE ligados al PRI se desconocieron muchas firmas para impedir que el referéndum prosperara. En Jalisco, una red de OCS, Voces Unidas, consiguió más de dos veces el número de firmas requeridas para promover una Iniciativa Popular de ley contra la violencia intrafamiliar. A este gran esfuerzo ciudadano se opusieron los diputados priístas y los diputados varones panistas, y con argucias legaloides la dejaron en suspenso. Por presiones de OCS, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó al Congreso de Jalisco para que legislara sobre esa iniciativa. A finales de agosto del 2000 el Congreso atendió la recomendación, pero eludió un 80% de la propuesta ciudadana. En esta forma los partidos han frustrado cauces ciudadanos.

La relación de OCS con partidos opositores en gobiernos locales ha sido ambivalente. Con el triunfo del PRD en el DF muchas OCS fueron desmanteladas para incorporarse a las tareas de gobierno. Pero también, dado que ese triunfo fue visto como un escalón para la contienda presidencial del año 2000, el gobierno capitalino trató de que varios grupos y movimientos urbanos mitigaran sus demandas.

En la década de los noventa se fortalecieron movimientos por la despenalización del aborto y el derecho a la diferencia (feministas, homosexuales) que han tenido contacto con partidos de izquierda, los cuales han acogido sus luchas.

La lucha de los pueblos indios también ha enfatizado el derecho a una igualdad respetuosa de las diferencias. Han surgido muchas OCS que se han conectado con partidos, pero que han teni-

do su propia lógica en actividades en torno a las problemáticas de los derechos humanos, de los derechos de género, y de los derechos indígenas. En la organización de la consulta nacional de los zapatistas en 1999 llenaron espacios que antes ocupaban activistas de izquierda. Su característica es la pluralidad. Se han propagado también iniciativas que destacan las relaciones entre ética, política y ciudadanía, que convocan a construir una ética civil. Con el EZLN ha habido una relación también conflictiva. En 1994 Marcos apoyó a Cárdenas pero criticó al PRD. En el 2000 Marcos criticó el voto útil y defendió las propuestas perredistas de Cárdenas.

El movimiento estudiantil en la UNAM en 1999 y el 2000 fue una protesta por los efectos de la política neoliberal en educación. La parte más radical de este movimiento se expresó en contra del PRD e hizo manifestaciones antielectorales.

Muchos organismos de la sociedad civil han contribuido significativamente en la construcción y consolidación de la democracia, han sido un contrapeso a las tendencias autoritarias y el mismo hecho de que prolifere la organización entre la sociedad civil es uno de los grandes avances en la transición mexicana.

#### MOVIMIENTOS Y PARTIDOS EN LAS CAMPAÑAS Y ELECCIONES FEDERALES DEL AÑO 2000

En el último tramo del año 1999 muchas OCS impulsaron la idea de que era necesario que los principales partidos opositores constituyeran una coalición electoral para derrotar al partido de Estado. Esta idea prendió entre organizaciones y ciudadanos. Las encuestas concordaban en que una mayoría demandaba a los partidos esa coalición. Los partidos, pese a sus diferencias ideológicas, pudieron elaborar un programa consensado. Sin embargo, cuando llegaron a la tarea de definir cómo escoger al candidato presidencial, se entramparon. Llamaron a un grupo no partidista de ciudadanos al que le encargaron la tarea. Como los partidos no variaron sus posiciones, ese grupo fracasó. Los partidos habían querido pasarle la cuenta de este descalabro al grupo ciudadano convocado; pero las encuestas revelaron que grandes sectores ciudadanos achacaban a los partidos la culpabilidad.

Antes y durante la campaña diversas OCS se dieron a la tarea de organizar talleres de educación cívica para promover el voto

informado. Entre septiembre y octubre de 1999 se habían realizado varios encuentros nacionales de grupos ciudadanos que se constituyeron con el nombre *Poder Ciudadano, El poder es la gente*. Se convocaba a una acción ciudadana por la democracia y la vida. Se discutieron ocho grandes líneas: economía y vida digna; gobierno democrático con y para la gente; bienestar y derecho sociales; diversidad incluyente; seguridad pública, justicia y derechos humanos; cultura democrática; e inserción soberana en la globalización. Se trataba de construir una agenda de la sociedad civil (de organizaciones sociales, ONGs, asociaciones profesionales, de ciudadanas y ciudadanos en general), teniendo como interlocutores a los partidos políticos y candidatos. El periodo de la agenda sería para el siguiente sexenio, independientemente de quien ganara las elecciones. Se delinearon agendas nacionales y regionales. Después de los encuentros regionales se realizó el encuentro nacional. Se afirmó que los ciudadanos estaban cansados del bajo nivel de las campañas políticas; que no aceptaban que únicamente los partidos definieran y defendieran sus propias agendas, que no estaban dispuestos a que se les considerara sólo como votantes. Firmaron la convocatoria más de cien organizaciones, nacionales, regionales y locales. El núcleo coordinador de esta red estaba constituido por seis organizaciones: Alianza Cívica, Causa Ciudadana, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Fundación Arturo Rosenblueth, Movimiento Ciudadano por la Democracia y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Se enfatizó que los ciudadanos tenían el derecho y la responsabilidad de participar activamente en la vida pública para impulsar la democracia, la equidad y la vida digna. Se recalcó que la acción ciudadana por la democracia y la vida tenían como horizonte y como método la construcción de poder ciudadano, la construcción de ciudadanía con derecho y responsabilidad en las decisiones de la vida pública del país. Se definió al movimiento como plural, no partidista y abierto. No se apoyaba ni rechazaba a ningún partido o candidato. Hubo la participación de 600 organizaciones en 18 entidades federativas. En el encuentro nacional participaron 150 delegados que habían sido nombrados de 256 organizaciones y de 23 estados.

Las propuestas de agenda nacional incluían una nueva política económica que lograra crecimiento sostenido con equidad; se planteaba reactivar y recuperar la capacidad productiva del cam-

po; pugnar por el reconocimiento de los derechos y culturas indígenas; construir una cultura de paz; una reforma democratizadora del Estado; garantizar la vigencia del derecho de asociación y organización sin trabas; el reconocimiento de las formas directas de participación ciudadana; modificar las prioridades presupuestales; legislar sobre la elegibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales; impulsar un plan nacional de igualdad de oportunidades para las mujeres; y garantizar el reconocimiento de la diversidad social.

Entre las tácticas de acción se acordó buscar convergencia con los movimientos en marcha y acompañar las campañas que estaban en curso (Jubileo 2000, Marcha de las Mujeres, Grito de los Excluidos, Presupuesto Alternativo, Cabalgata por la dignificación del campo mexicano, Campaña por la libertad sindical; etc.). Se planteó la necesidad de convertir en prioridad la agenda en cada una de las organizaciones participantes, dialogar con la población y levantar firmas de adhesión a la agenda. Se aceptó que era urgente realizar una movilización nacional antes de que entrara el siguiente presidente. Había que emplazar al gobierno, a los candidatos y a los partidos a que se pronunciaran sobre la agenda.

Durante la campaña esta red convocó a los ciudadanos a evaluar candidatos para que se reflexionara el voto. Cuatro días antes de las elecciones hizo público un llamamiento a los ciudadanos para que ejercieran la libertad al votar. Realizó un escueto balance de su actuación. Destacó como un importante logro ciudadano la construcción del consenso denominado *Agenda Nacional de la Sociedad Civil*. Recordó que en marzo, cinco de los seis candidatos (menos el del PRI), habían aceptado la invitación de recibir y tomar posición sobre la Agenda. El 2 de junio esos cinco candidatos habían firmado los Compromisos y Responsabilidades con Poder Ciudadano. Tres aceptaron el documento y lo firmaron en su totalidad. Cárdenas amplió lo de pacificación de Chiapas a partir de enviar inmediatamente al Congreso la iniciativa de Ley de la COCOPA. Fox aceptó 12 puntos y matizó los otros 12. La red anunció que después de las elecciones se exigiría el cumplimiento de los compromisos.

En los comicios del año 2000, Alianza Cívica observó las elecciones. Diseñó acciones para combatir las prácticas de compra y coacción de votos. Diseñó un observatorio ciudadano para vigilar la limpieza y equidad del proceso e identificó municipios de alto

riesgo. Realizó un seguimiento de los recursos públicos. Detectó el uso electoral de los programas sociales. A través de redes hizo una observación integral no sólo en el campo, sino en zonas urbanas marginadas. Impulsó una estrategia de educación cívica en torno al voto libre y secreto. En la primera semana de mayo emitió su primer comunicado en el que señalaba que una cuarta parte de la población consideraba que los programas y ayudas sociales del gobierno dejarían de existir si el PRI perdía la elección. Denunció que esa percepción formaba parte de una cultura política antidemocrática, pues se identificaba al gobierno con el partido oficial y se trataba al voto como un medio de intercambio por los beneficios sociales recibidos. Dicha percepción animaba la utilización ilegal de los programas sociales para inducir el voto. Al final del proceso, Alianza Cívica reveló que se habían dado violaciones sistemáticas al voto en 6.3% de las casillas. Documentó que, sobre todo en el sureste, se había inducido el voto mediante el uso de programas de beneficio social.

El 10 de junio, reunidos en el Zócalo de la ciudad de México cientos de representantes de pueblos indios, de movimientos sociales, civiles y políticos procedentes de 21 estados de la República declararon que la paz y la democracia eran condiciones indispensables para el desarrollo nacional y para el bienestar de los sectores mayoritarios del pueblo mexicano. Se pronunciaron en contra del modelo económico neoliberal, por una solución negociada en Chiapas, y por revertir la militarización del país. Pidieron a los mexicanos y mexicanas amantes de la paz que se unieran al emplazamiento hecho a los seis candidatos presidenciales a resolver el conflicto mediante el retiro de las fuerzas militares y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

En el marco de la campaña federal del año 2000 se dio otro movimiento plural en torno al voto útil. Personas no pertenecientes a la Alianza para el Cambio (PAN y Partido Verde) consideraban que la candidatura de Fox tenía posibilidades de ganar si votaban por él. Argumentaban que el desarrollo de las campañas había colocado a Fox como el único candidato capaz de derrotar al PRI y terminar con el partido de Estado. Se comprometían a promover el voto útil a favor de Fox para derrotar al PRI, si éste firmaba acuerdos en torno a la transición democrática. Rescataron la plataforma que se había acordado entre los partidos opositores antes de que se rom-

rieran los trabajos de la coalición que se estaba fraguando entre el PRD y el PAN. Destacaron que esa plataforma para la transición era posible porque la mayoría de los ciudadanos la estaba haciendo suya.

En dicho programa se establecía que los cambios estructurales y pacíficos debían sustentarse en políticas públicas y en nuevas relaciones de poder político, social y económico en la sociedad mexicana, para así generar oportunidades para quienes carecían de ellas. Se enfatizó que la política de asistencia no era la solución al problema de la pobreza. Se anunciaba que se mantendría el carácter gratuito y laico de la educación pública y que el gobierno que emanara de esa alianza promovería por todos los medios a su alcance el mejoramiento de su calidad. Se daría apoyo preferente a las mujeres para superar las condiciones de desigualdad y de exclusión. Se ofrecerían a los jóvenes mayores oportunidades de empleo, educación, recreación en un ambiente de libertad y seguridad. Se rompería con las prácticas clientelares, excluyentes, corporativistas, caciquiles que han permitido manipular la pobreza para fines políticos como primer paso para avanzar en la justicia; se tendría hacer que la ley fuera para todos. Se reconstruirían y democratizarían las instituciones de apoyo al desarrollo rural, la educación, la salud y los programas de bienestar comunitario, para que las comunidades tomaran las decisiones que promovieran el desarrollo. Se combatiría la corrupción con decisión y eficacia, empezando por los altos niveles de la función pública. Se establecería un sistema efectivo de rendición de cuentas. Se eliminaría la impunidad y las complicidades entre los funcionarios públicos. Se daría transparencia a la administración pública, seguimiento de los resultados del ejercicio del gasto. Se garantizaría el derecho a la información de modo que cualquier ciudadano pudiera estar enterado del ejercicio de la función pública y se ligaría esta garantía al sistema de rendición de cuentas. A esa plataforma le hicieron unos añadidos. El gobierno de transición se comprometía a respetar las libertades para los individuos, grupos sociales y etnias, primordialmente en lo que se refiere a sus costumbres y formas de vida. El modelo de desarrollo que debía adoptar el nuevo gobierno reconocería que la naturaleza es un bien patrimonial, que todos los mexicanos tienen derecho a un ambiente sano y que los patrones de aprovechamiento y manejo deben garantizar que las actuales y futuras generaciones podrán

hacer uso del capital natural para satisfacer sus necesidades. El gobierno de transición tendría que pronunciarse por un sindicalismo libre y plural; manifestarse en contra del corporativismo; impulsar un programa nacional de recuperación salarial, y una reforma laboral y productiva. En un acto solemne en donde estuvieron presentes representantes del que fuera el PC y de otros representantes de la izquierda, Fox firmó el documento. Se enfatizó el compromiso a mantener el carácter laico del Estado mexicano y de la educación pública; promover reformas legales y constitucionales que acotaran las facultades del Presidente y se garantizara la autonomía y equilibrio de poderes. Fox se comprometió también a respetar la libertad, diversidad y pluralidad de la sociedad y no usar nunca el poder del Estado para imponer estilos de vida, creencias religiosas o códigos de comportamiento. Aceptó el reto de generar las condiciones para la solución pacífica del conflicto en Chiapas y el desarme de los grupos armados en el país; y a buscar un aumento sustantivo de los recursos de la educación. De acuerdo con estos compromisos no podría privatizar petróleo ni electricidad.

Otros grupos también ofrecieron promover el voto útil si había compromisos del candidato Fox con dichas agrupaciones plurales. Uno de estos grupos, pocos días antes de la jornada electoral, elaboró una declaración que sostenía que la alternancia en la presidencia de la República se podía lograr a través de las urnas, para completar el ciclo de la transición democrática que se había iniciado hacía varios años. La alternancia sólo sería posible si se consolidaba el candidato opositor. Ese grupo invitaba a votar por Fox para alcanzar la tan deseada alternancia. Entre los compromisos estaban el establecer un gobierno plural e incluyente; nombrar mexicanos progresistas en carteras como Sedesol y PEMEX; tener tolerancia a la diversidad; garantizar el respeto absoluto a todas las minorías; impulsar un Estado que promoviera a la pequeña empresa; y recursos masivos a las regiones más pobres, administrados por la comunidad; reconocer la autonomía de los pueblos indígenas y adoptar de inmediato los Acuerdos de San Andrés; respetar las conquistas de las mujeres, ratificando los convenios internacionales en materia de derechos de la mujer.

En respuesta al movimiento en torno al voto útil, la Alianza por el Cambio publicó un compromiso de Fox con los pueblos indígenas de México. Se comprometía a crear el Consejo Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; dedicar tiempo oficial en los medios para la promoción de la cultura y tradiciones indígenas; generar programas de desarrollo regional con inversión y con la participación de las comunidades indígenas; convertir el documento de la COCOPA en una iniciativa del Ejecutivo y enviarla el primer día de su gobierno; proceder desde el primer día con el desarme de los paramilitares; reiniciar el diálogo en los temas pendientes con el EZLN; nombrar un comisionado que tuviera el reconocimiento del EZLN y de las organizaciones indígenas independientes.

La elección del dos de julio de 2000 fue un referéndum que perdió el partido de Estado. Los compromisos adquiridos por el presidente electo deberán ser cumplidos, pero para esto los grupos de la sociedad civil deberán estar atentos para que eso suceda. Ese día, se abrió la puerta en México para el desmantelamiento de uno de los partidos de Estado más viejos de la historia mundial. El PRI, un partido corroído por la corrupción, realizó sus mayores esfuerzos para conservar el poder presidencial. Hizo un escandaloso manejo de recursos, protegió a financieros defraudadores para asegurar complicidades, utilizó recursos públicos a manos llenas para la compra, la coacción y el condicionamiento del voto, desató una dispendiosa campaña sucia en contra del candidato de la Alianza por el Cambio. Pese al fraude documentado por los observadores de Alianza Cívica, de Global Exchange y de otros organismos internacionales, el voto joven hizo triunfar a Vicente Fox. También influyó el llamado voto útil. Incluso, una corriente del PRD promovió el voto por Fox para presidente y por López Obrador, para jefe de gobierno del DF.

En las cifras electorales hay huellas del voto útil. Si restamos del total de votos recibidos por Alianza para el Cambio en la elección presidencial la cifra más alta en las otras dos elecciones (Senadores y Diputados) nos arroja la cantidad de 1,761,392 votos (11% de la votación de Alianza para el Cambio). Siguiendo el mismo procedimiento con los demás partidos encontramos que hubo un voto foxista de 773,404 proveniente de la Alianza por México (11% de su votación); 313,085 del Partido del Centro Democrático (60% de su votación); 157,775 del PRI (1.1% de su votación); 118,013 del PARM (42.9% de su votación) y 77,077 del PSD (11% de su votación). Pero el voto útil también se pudo dar en ciudadanos que votaron

por la Alianza para el Cambio en los tres niveles (presidente, senadores y diputados).

El electorado abrió las puertas para la desestructuración del partido de Estado al quitarle la presidencia; pero ese partido todavía cuenta con 21 (de los 32) gobernadores y con la mayoría de los municipios del país, y conserva inmuebles públicos. La composición del actual PRI como partido de Estado implicó un largo proceso: lugar para dirimir conflictos entre jefes regionales armados, la estructuración corporativa entre sectores (los obreros, los campesinos, el sector popular y un sector innominado de los grandes empresarios), la centralización de las decisiones en la presidencia, el tejido de relaciones y de complicidades con los poderes económicos prominentes. El PRI perdió en el año 2000 la pieza más importante desde donde emanaba el autoritarismo y la cohesión: la presidencia. Pero todavía falta que deje de usurpar los colores patrios, que los gobernadores en cada región no sigan haciendo uso de los recursos públicos para favorecer a ese partido, que haya libertad sindical y se acabe con el corporativismo que frena acciones de cambio. Ha comenzado el desmantelamiento del PRI, que puede convertirse en un partido más, sin privilegios. Pero eso llevará tiempo y no se hará sin fuertes resistencias. Las pugnas sangrientas entre grupos priístas en agosto del 2000 en el municipio de Chimalhuacán dan muestra del agotamiento del viejo pacto que mantenía el partido de Estado con grupos sociales y políticos. Recursos, puestos de elección popular e impunidad se otorgaban desde el poder a cambio de votos y control político. Con la derrota del PRI las posibilidades de cumplir esos pactos se han erosionado, y las luchas internas, ya sin el eje articulador presidencial, se han exacerbado.

Hay organismos fuertemente controlados por líderes, que al no encontrar espacio en su viejo partido empiezan a transitar de partido en partido para conseguir candidaturas. Muchos partidos con registro reciente y sin inserción importante en la sociedad les dan cabida para conservar su registro. Así, se reproduce lo más atrasado de la relación entre organizaciones y partidos políticos. Alianzas entre partidos y escisiones al interior de éstos se van definiendo según la capacidad de controlar o atraer a movimientos políticos sin identidades ni lealtades partidistas. Las alianzas son efímeras. Desde hace tiempo, los partidos han servido en campa-

ñas locales como franquicias para los grupos de poder regionales o para descontentos de partidos que no alcanzaron candidaturas.

En *La Jornada* se dio una discusión entre académicos. Pablo González Casanova apoyaba al PRD y se pronunciaba en contra del voto útil. Wallerstein y Chomski afirmaban que la alternancia era más ilusión que un paso democrático real, porque detrás persistía la dictadura empresarial. Aceptaban que si la alternancia abría espacio para el debate de opiniones de política real entonces podría generarse algo diferente. Pero advertían que las estructuras reales del poder podrían quedar intactas y ocultas. Después del triunfo de Fox, Roitman consideró que no había transición sino sólo cambio de partido en el poder. Han seguido las polémicas en cuanto a lo que ha significado la derrota del PRI. Hay quienes afirman que hay cambio de régimen y otros que no hay eso ni transición sino sólo cambio de partido en la presidencia. Entre las ONGs también sigue el debate. Unas ven al nuevo gobierno como un peligro y le achacan tener una visión de los ciudadanos como clientes y que su concepción empresarial de "calidad total" no puede resolver los problemas de los pobres y los marginados. Otros aducen que se trata de una oportunidad.

Después de las elecciones, la red Poder Ciudadano y los grupos que promovieron el voto útil analizaron las formas para exigir a Fox que cumpliera los compromisos adquiridos en la campaña. El 17 de agosto, Fox se reunió con nueve organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y con 11 grupos ambientalistas. Expresó su interés por ciudadanizar al gobierno a través de la participación directa de la sociedad en la estructura gubernamental y en la toma de decisiones. Anunció que durante su gobierno se alentaría el crecimiento de las ONGs y habría facilidades para el desarrollo de sus tareas.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), a mediados de agosto, dio su punto de vista sobre las elecciones del 2 de julio. Todavía no se daba una transición a la democracia. Se había producido una alternancia política. Temían que todo siguiera igual; aunque no perdían la esperanza de que el nuevo gobierno los oyera.

Jalisco no había concluido el proceso federal y ya se encontraba en el proceso electoral para la gubernatura, el congreso y los ayuntamientos. Un grupo ciudadano sacó lecciones de la experiencia panameña de 1999 donde 25 organismos de la sociedad civil

impulsaron un pacto electoral que comprometió a partidos, medios de comunicación, organismos electorales y de la sociedad civil. Varias personas de diversas tendencias se propusieron impulsar un pacto ético político por la dignificación de la política y el gobierno de Jalisco. Se argumentó de que muchos ciudadanos querían que la democracia avanzara en esa entidad. Reconocían los avances que se habían dado; pero señalaron que faltaba un buen tramo para su consolidación. Aclararon que entendían la democracia no sólo como un conjunto de reglas electorales que garantizaban la equidad y la transparencia electoral sino como una forma de convivencia que transcendía a los partidos e involucraba a todos los ciudadanos. Se proponían promover un proceso electoral en el que predominara el respeto a las personas, el debate de ideas y programas de gobierno y el irrestricto respeto a la voluntad ciudadana expresada en el voto libremente emitido y escrupulosamente contada. Precisaban que sabían que existía una legislación que establecía los principios que normaban las contiendas electorales, pero recalcaron que una gran parte de los ciudadanos estaban exigiendo que los participantes en los comicios enfatizaran su compromiso de cumplir la letra y el espíritu de la ley. Eso suponía propiciar el desarrollo democrático más allá de sus intereses personales y partidistas. Entre los compromisos propuestos a los partidos estaban realizar un proceso electoral que se caracterizara por el debate, la discusión y las críticas a programas e ideas y temas fundamentales para el Estado y no por ataques y diatribas; eliminar la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones; respetar los topes de gastos de campaña, desarrollar campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia, los valores de paz, y en el respeto a los derechos humanos y en la educación cívica; no difundir directa o por terceras personas o agrupaciones, mensajes violentos o calumniosos; hacer promesas de campaña responsables y realizables; no publicar ni divulgar encuestas dirigidas a manipular la opinión pública; realizar un proceso electoral alejado de toda manipulación política o falta de ética, como la oferta de nombramientos o proselitismo basado en la compra de votos. En los compromisos de gobernabilidad democrática se proponía la entrega transparente de todas las instancias de gobierno a quienes resultaran ganadores en el proceso electoral; la creación de una instancia de fiscalización independiente para que esa labor democratizadora no fuera utili-

zada a favor de los partidos; terminar con las políticas de cuotas como forma de negociación en el proceso legislativo; acortar los tiempos de campañas electorales y hacerlas más austeras y equitativas; hacer transparente la discusión y el manejo del presupuesto; escuchar y tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos; propiciar la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas; rendir cuentas claras; hacer accesible la información pública. También había compromisos para los medios de comunicación social. Se proponía que fueran vigilantes de que la actividad informativa estuviera inspirada en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica de los ciudadanos; respaldar y alentar todo esfuerzo de promover la tolerancia y cuidar que las noticias o anuncios no indujeran a la violencia; no generar pugnas inexistentes; promover campañas y debates donde se discutieran los problemas de la entidad federativa y las propuestas de los diferentes partidos; cumplir con el deber de la objetividad informando en forma clara los acontecimientos; no distorsionar o editar en forma tendenciosa por favoritismos personales y o políticos las noticias de índole política; promover la participación electoral libre e informada; y ser equitativos en la cobertura noticiosa. Finalmente había compromiso también de la sociedad civil. Se decía que estos organismos reconocían la importancia del pacto ético político porque estaban convencidos de que Jalisco requería de un proceso electoral pacífico y de altura, donde se debatieran los temas de importancia, los programas y propuestas de candidatos y partidos y que se respetara la voluntad ciudadana. Enfatizaban que Jalisco requería de un ejercicio de gobierno y del poder que la ciudadanía otorgaba a sus representantes mediante el voto, absolutamente transparente, visible y acorde con los compromisos planteados en las plataformas políticas durante las campañas electorales. Anunciaban que estarían vigilantes del cumplimiento de esas promesas, y exigirían la rendición de cuentas así como la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas. Se adherían al pacto y llamaban a los actores políticos para que cumplieran cada uno de los puntos del pacto. Concluían afirmando que como ciudadanos y ciudadanas eran actores fundamentales de ese proceso. Se comprometían a trabajar en la actividad política constructiva. Anunciaban que estarían vigilantes del proceso electoral, de los organismos electorales, de los partidos, de los funcionarios

públicos y de los medios de comunicación para que actuaran apegados a la ley y a los principios éticos del pacto. Así, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos sin partido entran en contacto con los partidos para diseñar espacios hacia una democratización reivindicando principios cívicos.<sup>3</sup>

#### HACIA UNA TEORIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y PARTIDOS

La problemática de las relaciones entre sociedad civil y partidos ha estado presente, sobre todo, en los últimos tiempos. En la III Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo (Brasilia, 23-24 de marzo de 1998) y en la IV Reunión (Madrid, 13-14 de octubre de 1998), se insistió en el tema con el fin de encontrar formas de apoyar la construcción de consensos necesarios para la consolidación de la gobernabilidad democrática en América Latina.

Los zapatistas han hecho importantes innovaciones en la política mundial. Se les ha invitado a conformar un nuevo partido político, pero han sido enfáticos en sostener que no pretenden el poder sino que éste se ejerza de tal forma que el que mande obedezca a la sociedad. Han tenido como aliado natural en sus demandas al PRD; pero han preferido establecer un diálogo con los grupos

<sup>3</sup> Esta apretada síntesis se queda a finales del siglo XX. Restaría hacer la relación de los inicios del siglo XXI. Muchas organizaciones sociales muy activas de finales del siglo XX parecieron quedarse pasmadas. No pocos de sus dirigentes fueron incorporados de alguna u otra forma en algunas posiciones de gobierno tanto en el DF como en el gobierno foxista. Además, ante las protestas de corte priísta no querían confundirse con un partido que trataba de impedir su desmantelamiento, sobre todo, en uno de sus aspectos cruciales, la impunidad. Además, como hubo muchas expectativas en el cambio, y éste no se produjo, la desilusión ha ido creciendo. No habría que olvidar que encuestas como las realizadas por Latinobarómetro así como las que organizaron el IFE y la Secretaría de Gobernación (véase *Este País*, septiembre de 2002) han revelado que los partidos políticos se encuentran en los niveles más bajos de confiabilidad. Hay una buena proporción de ciudadanos que consideran que los partidos se encuentran inmersos en la defensa de los intereses orgánicos y alejados de las demandas más sentidas de la población. También han aparecido movimientos, como el de los campesinos de Atenco en contra de la construcción de un aeropuerto en sus tierras, que dan muestras de nuevos sesgos anarquistas antipartidistas.

de la sociedad civil que demandaron detener la guerra y que han estado atentos a la situación chiapaneca. Han hecho varias consultas nacionales, varias visitas a la ciudad de México, y una a todo el país. Han organizado encuentros internacionales en contra del liberalismo. El dinamismo generado por el zapatismo ha inspirado movilizaciones en contra de la política neoliberal en Seattle, Washington, Davos y Los Ángeles. Al evaluar las potencialidades abiertas por las consultas zapatistas grupos civiles en Europa han repetido esta clase de experiencias (González Casanova, 2000). Así, en España se realizó el II Encuentro Intercontinental de Lucha por la Humanidad y en Contra del Neoliberalismo.

Se ha enfatizado la necesidad de construir una nueva forma de pensar y actuar. Las consultas han sido, además de intercambio de experiencias, discusiones de formas de lucha concretas. Se ha resaltado la lucha por la defensa de la naturaleza y del planeta, y se han ido tejiendo redes internacionales. Se destaca la recuperación de los valores humanos y el rechazo al personalismo de los dirigentes. Y se pide que no sólo se trate de llegar a las metas, sino también disfrutar el camino. Se buscan alternativas tanto a nivel planetario como en el microsocio. Se discuten los problemas de la desocupación y de las migraciones. Se privilegia el papel de la sociedad civil. Aunque no dejan de visualizarse sus necesarios interlocutores entre los que están los partidos. Pero todo esto en el intento de construir una nueva organización del mundo, y poner en práctica nuevas maneras de representarse la política.

Uno de los elementos recurrentes es la tolerancia como atributo indispensable de las relaciones sociales y del ejercicio del poder. Se analiza la necesidad de la insumisión y de la rebeldía contra el poder entendido como la posibilidad de decidir sobre la vida del otro, para construirlo como autoafirmación de los sujetos para poder vivir la vida. En esa discusión es recurrente la temática de la relación entre la sociedad civil y los partidos políticos. Se crean maneras alternativas de interactividad (intercambio de ideas y comunicaciones y la constitución de redes de diversa amplitud).

Los cambios económicos han socavado bases clientelistas del viejo sistema político. Cuando la gente más necesita al Estado, los políticos le retiran la protección, al mismo tiempo que se benefician personalmente de su acceso exclusivo a los flujos de riqueza global. Pero se mantiene todavía uno de esos clientelismos: el que

da asistencia a cambio de votos. La nueva revolución tecnológica va modificando la base material de la sociedad. Las relaciones de trabajo se han diversificado e individualizado. El estado de bienestar ha sufrido un fuerte dismantelamiento. Hay una tendencia a incorporar segmentos de la sociedad, por una parte, y a excluir y marginar a otros. Y esto no sólo entre países, sino al interior de cada país.

Las relaciones entre capital y trabajo se han transformado profundamente. La política también ha sufrido fuertes modificaciones. El hecho de que la política se enmarque en el lenguaje de los medios basados en la electrónica tiene consecuencias sobre las características, la organización y las metas de los procesos políticos. El Estado nación va perdiendo poder. Va creciendo la interdependencia multilateral entre los Estados. Los Estados nación siguen existiendo pero como nodos de una red de poder más amplia. El dismantelamiento del Estado de bienestar produce una mayor desigualdad social. Grandes sectores de la sociedad quedan desconectados del sistema dinámico globalizado. La creciente incapacidad del Estado para controlar los flujos de capital y garantizar la seguridad social disminuyen su importancia para el ciudadano medio. Se multiplican situaciones efímeras, alianzas provisionales. Las derechas, los centristas, los izquierdistas procesan sus proyectos y estrategias a través de medios tecnológicos similares. Estos medios inducen nuevas reglas de juego que afectan la sustancia de la política. Los medios se van convirtiendo en un espacio privilegiado de la política. Lo que cada vez es más evidente es la crisis de los sistemas políticos tradicionales basadas en formas organizativas y estrategias políticas de la era industrial.

En la actualidad los ciudadanos reciben la mayor información por los medios electrónicos. Los mítines y manifestaciones callejeras siguen siendo rituales importantes, pero si pasan a los medios. Se va imponiendo el modelo del *marketing* político. Se privilegia la política del escándalo. Pero el cinismo y el escándalo no son expresiones de la nueva política sino de su crisis. Hay crisis del Estado nación, crisis de la credibilidad del sistema político; hay desafección creciente de los ciudadanos respecto a los partidos y los políticos. Crece la volatilidad en el electorado. El sistema político también se fragmenta. La gente no se retira de la política. Va ganando espacio la política simbólica. Hay movilizaciones por problemas con-



cretos, por el localismo. La política se singulariza. Hay posibilidades de reconstruir vínculos de representación política a través de la política local. Pero el localismo tiene límites. Los movimientos sociales suelen ser fragmentados y localistas con temas efímeros. La fragmentación social se extiende. Ante esto surgen movimientos que plantean que la toma de poder no es lo central, sino recrear la sociedad, inventar de nuevo la política. Las demandas de género y medioambientalistas han cobrado nuevos impulsos. Los actores sociales y muchos ciudadanos maximizan las posibilidades de representación de sus intereses y valores aplicando estrategias en las redes de relación entre diferentes instituciones a diversos niveles de competencia (Castells, 1999).

Touraine ha destacado que la sociedad de la información (en la que el capital financiero se ha desarrollado mucho más que el comercio internacional) es aquella en la que hay nuevas fuerzas de producción, nuevas fuerzas sociales, nuevos actores sociales y nuevos actores políticos.<sup>4</sup> Se han hecho advertencias para evitar los determinismos. Ante el globalismo no es la única política la capitulación. Hay centralidad de la acción humana. Si bien es cierto que hay decadencia de las formas políticas tradicionales, también se hace evidente que surgen actores sociales inéditos y demandas de nuevo tipo. Hay tendencia a rechazar todo tipo de estructuras verticales y de buscar modalidades horizontales.

Un régimen democrático gira en torno a los ejes de Estado y sociedad civil. Una sociedad civil fuerte es la que se ha dotado de instancias orgánicas que permitan a individuos y grupos expresar sus intereses y hacer sentir públicamente sus demandas. Hay redes que permiten que estas organizaciones puedan converger ante el Estado. En el sistema político se encuentran los partidos que han servido como lazos entre la sociedad civil y el Estado. Vinculan esos mundos con lógicas diferentes. Los partidos son intermediarios. Por eso está el papel de lo representativo. Se pide honestidad y eficiencia de quienes se comprometen con la acción de gobierno. Se pide que los partidos sean también democráticos y que atiendan las necesidades sociales y no sólo sus intereses. Se levantan voces en contra la partidocracia, pues las leyes de reformas políticas han

<sup>4</sup> Alain Touraine, en entrevista a la radio uruguaya *El Espectador*, 12 de mayo del 2000.

sido realizadas por partidos que velan por sus intereses, en particular su propia reproducción.

La crisis de la democracia a finales del siglo xx, y el desafecto que cada día aumenta entre los ciudadanos hacia los partidos ha colocado a éstos en una situación de redefinición. Mientras los ciudadanos perciban que los partidos sirven más para la reproducción de los cuerpos burocráticos que para resolver demandas sentidas de la gente, ese desapego crecerá. Desde hace tiempo el estudio sobre los partidos realizado por Michels develaba que la organización partidaria llevaba a la dominación de los elegidos sobre los electores.

Los hechos parecerían dar la razón al pesimismo micheliano, según el cual habría una ley por la cual la organización partidaria generaría procesos oligárquicos. Desde que apareció ese escrito clásico, se ha respondido que sólo una práctica política contraria podría refutar esa acusación. Lejos nos encontramos de la formación clasista de los partidos. Más aún, cuando las clases han sufrido una redefinición fundamental. También la concepción leninista del partido dirigente de toda la sociedad ha quedado refutada por los fracasos históricos. Los lineamientos gramscianos todavía podrían rescatar algunos aspectos del partido de nuevo tipo. Según los fines y acciones de los partidos serán de carácter progresista o regresivo; según sus métodos organizativos serán democráticos o burocráticos.

La democracia interna seguirá siendo una de las señales más claras para la sociedad de las potencialidades de cada partido. La relación entre dirigencias, cuadros medios y bases partidistas por una parte, y la relación con movimientos y segmentos de la sociedad por la otra, identificarán si un partido es o no democrático. Las formulaciones estatutarias no bastan. Se requiere una práctica consecuente. Habría que tener en cuenta varias precisiones. La primera es, que pese a sus crisis, por un buen tiempo seguirán siendo medios para que los ciudadanos decidan sobre el poder público. La segunda tiene que ver con su forma. Hasta ahora, las diferentes expresiones partidarias que hemos conocido tienen que ver con una expresión que responde a requerimientos de la segunda revolución industrial. Ésta masificó la producción y a la sociedad, y también incidió en la masificación de los partidos. Las identidades solían ser más férreas y estables. Las identidades partidarias tendían a ser una especie de segunda piel. Con la revolución informática la sociedad ha sufrido grandes cambios. Las formas partidarias,

se deben ir adaptando. Las identidades son fluidas, no fijas. Las formas de interrelacionarse tampoco suelen ser estables sino reticulares y en torno a demandas particulares.

Tampoco hay que caer en la mitología de una sociedad civil virtuosa y homogénea. Pero hay que resaltar que una dimensión de la ciudadanía es no sólo el ejercicio real de los derechos políticos (reconocidos pero muchas veces no respetados) sino lo innovador y constructor de nuevos derechos. Lo ciudadano se inscribe en la posibilidad de mejorar y transformar las mismas instituciones democráticas. La construcción de ciudadanía sirve de contrapeso al ejercicio del gobierno (Ramírez, 1999).

La ciudadanía social ha ido cambiando en los últimos veinte años. El acceso a los derechos sociales es una realidad cambiante. Se ha sostenido que los derechos sociales constituyen un ingrediente fundamental en la construcción y desarrollo de la ciudadanía. Estos derechos no se contraponen sino que reclaman, además, los derechos civiles y políticos.

Se ha incorporado el concepto de titularidades a los derechos: son las que conceden a las personas una pretensión legítima sobre las cosas, otorgan la capacidad de disponer de ellas a través de los medios legales disponibles en la sociedad. Se trata de una capacidad individual estructurada socialmente a través de las leyes que otorgan un grado de pertenencia. Los derechos básicos constituyen titularidades, e incluyen derechos garantizados constitucionalmente por el hecho de ser miembros de la sociedad. La ciudadanía es un conjunto de titularidades. Últimamente se han ido retirando de los derechos sociales muchos beneficios, pero la ciudadanía social no puede permanecer mutilada porque incluye el reconocimiento y el acceso a derechos sociales básicos: salud, educación, vivienda, alimentación y trabajo (Sen, 2000).

La lucha social es la que ha conseguido la titularidad de derechos: hay derechos de la familia, étnicos, de minorías sexuales, de preservación de la naturaleza y el medio ambiente. Hay consideraciones también del hombre y la mujer en función de sus papeles sociales: como menor, anciano, enfermo, etc. Así se ha ido avanzando por varias generaciones de derechos hasta llegar a los llamados de cuarta generación. Se le va dando contenido a la ciudadanía. Se demanda calidad de vida, derecho a las diferencias, valoración de identidades. Se exige respeto y ampliación de los derechos. Se

pone énfasis en la sociedad civil y no tanto en el Estado, contra la clientelización de lo ciudadano. Hay identidades que emergen desde abajo y se centran en lo ciudadano. Sin embargo, los excluidos, por el hecho de serlo, también carecen de la organización para hacer respetar sus derechos. Se requiere una intensa labor de cultura política para pasar de la ciudadanía estatutaria al ejercicio activo de la misma.

Un hecho irrefutable es que con mayor ímpetu ha reaparecido la cuestión social como clave del futuro de la democracia. El sentimiento de insatisfacción respecto de los resultados de la democracia es un fenómeno casi universal. Se va viendo que los poderes que cuentan y deciden no son los que se eligen, sino aquellos poderes económicos que situados por encima de parlamentos y gobiernos les imponen directrices que hacen inoperantes los programas partidistas. Si se elaboran programas en los que se tienen en cuenta las preferencias de los ciudadanos, en la práctica no se siguen las políticas acordes con esas preferencias. Los gobernantes, los partidos y los políticos en su conjunto mundialmente están valorados negativamente. Además, los partidos tienden a responder a los votantes medios, lo cual produce insatisfacción en no pocos. Los vínculos de identificación partidista se han deteriorado. Los partidos ganan elecciones, pero no la confianza de los electores. Los resultados de los gobiernos son insuficientes por la correlación de fuerzas de la era informacional (Paramio, 2000). Un gobierno democrático debe asegurar a sus ciudadanos no sólo espacios democráticos, sino condiciones dignas de vida y aun la felicidad.<sup>5</sup> Se tienen que democratizar las condiciones económicas y culturales de acceso a la opinión política. Contribuir a la crítica de las ilusiones sociales es un requisito indispensable de una condición democrática (Bourdieu, 2000).

La historia social enseña que no se logra una política social sin un movimiento social. Actores importantes de la sociedad civil han sido los movimientos sociales. Éstos han experimentado fuer-

<sup>5</sup> Ante un estado de malestar creciente de las mayorías por la política neoliberal parece que la obligación de propiciar la felicidad por parte de los gobiernos ha sido olvidada. Sería interesante saber qué piensan los políticos sobre la felicidad.

tes altibajos. Hay momentos de ascenso y otros de debilitamiento. No todos los movimientos tienen la misma direccionalidad. Ante una creciente pluralidad se van instituyendo diferentes representatividades. Habría que aclarar que un movimiento social no es propiamente una agrupación sino una forma compleja de acción.

Entre los nuevos movimientos sociales podemos ubicar los correspondientes a las ONGs. Estas agrupaciones que no tienen fines de lucro sino que se encaminan a la beneficencia y promoción social datan de tiempo atrás. No obstante, primero con la imposición de las políticas neoliberales, y con su quiebre últimamente, han cobrado una relevancia preponderante entre la actividad basista de amplios sectores sociales.

Las ONGs han sido parte importante de movimientos específicos, y ellas mismas han ido construyendo un movimiento en sí mismo. Las incapacidades estatales para dar respuestas a demandas postergadas y crecientes de una gran porción de la población, han abierto mayores campos a las ONGs. Muchos militantes de movimientos progresistas, antiguos y nuevos promotores sociales y miembros de asociaciones asistencialistas se han encontrado búsqueda de salidas a la crisis social y han establecido alianzas. Han surgido convergencias entre ideales libertarios, humanistas y de compromisos emanados de creencias religiosas para coincidir en una crítica a las condiciones injustas y para buscar alternativas viables. Si antes, prevalecía una atención a los más desamparados, al haber crecido el margen de la miseria ha llevado a muchos grupos a tratar de impulsar un cambio social.

James Petras ha sido un duro crítico de las ONGs. Ha considerado que no habría que asombrarse porque líderes y activistas de ONGs se hubieran adherido a la campaña electoral de Fox. Considero que ese escenario era previsible, dado que en la transición en Chile, Bolivia, Argentina y América Central muchos de sus líderes se aliaron con regímenes neoliberales que se sirvieron de la experiencia organizadora de estos grupos y hasta de su retórica progresista para controlar protestas populares y socavar movimientos sociales críticos. La explicación que apunta Petras es que las ONGs dependen económicamente de organizaciones financieras del primer mundo, y que sus dirigentes en el tercer mundo pretenden escalar posiciones. Calcula que en el año 2000 existían en el mun-

do cerca de 100,000 ONGs que reciben alrededor de 10,000 millones de dólares, y compiten con los movimientos sociopolíticos por la lealtad de comunidades militantes. Las críticas que hacen esas ONGs de las violaciones a los derechos humanos, no conmueven a ese autor, pues argumenta que rara vez denuncian las violaciones de aquellos de quienes reciben financiamiento. Aduce que a medida que aumentó la oposición al neoliberalismo, el Banco Mundial (BM) ha incrementado sus donativos a las ONGs. Precisa que el punto de convergencia entre el BM y las ONGs es su rechazo al estatismo. Mientras las ONGs hacen críticas que defienden la sociedad civil, el BM fustiga el estatismo en defensa del libre mercado. Lo que ha sucedido, anota Petras, es que el BM y los neoliberales han aprovechado a las ONGs para minar el sistema de seguridad social estatal, y para compensar a las víctimas de las políticas neoliberales.

Mientras los regímenes neoliberales han disminuido los niveles de vida y han saqueado las economías, las ONGs han promovido la autoayuda, han reclutado a pequeños líderes locales y han atendido a pequeños grupos de desempleados. En esta forma las ONGs se han convertido, según el análisis de Petras, en el rostro "comunitario" del neoliberalismo. Como se achacó en su tiempo a los evangelizadores protestantes, ahora se imputa a las ONGs el despolitizar a los sectores pobres de la población. Además, para Petras, las ONGs no lo son tanto porque reciben donativos de gobiernos extranjeros y funcionan como agencias subcontratadas por los gobiernos locales. Petras subraya que las ONGs sabotean la democracia al arrancar programas sociales de las manos de las comunidades y crear dependencias de funcionarios no electos que son ungidos por agencias extranjeras.

Además, la ideología de esas ONGs destruye el sentido de lo público, la idea de que el gobierno tiene la obligación de procurar a todos sus ciudadanos, y en cambio fomenta la idea neoliberal de una responsabilidad privada. Así imponen una doble carga a los pobres: pagar impuestos para financiar al Estado neoliberal que sirve a los ricos, y autoexplotarse de manera privada a fin de satisfacer sus propias necesidades. Al profundizar en sus críticas Petras denuncia que muchos de los líderes de esas ONGs son ex marxistas o posmarxistas que tomaron mucho de la retórica del poder popular, la igualdad del género, el liderazgo de las bases, y han conseguido que ese lenguaje progresista disfrace el núcleo conservador

de sus prácticas. En lugar de enseñar sobre la naturaleza del imperialismo, las ONGs discuten sobre los excluidos, los indefensos, la extrema pobreza, sin pasar de los síntomas y analizar el sistema social que produce esas condiciones. Así esas ONGs crean un mundo en el que la apariencia de una solidaridad y acciones sociales ocultan una conformidad hacia las estructuras del poder. Por eso se han convertido en dominantes en ciertas regiones donde las acciones independientes han decaído. Petras concluye que la conversión de líderes de las ONGs de abanderados del poder popular a simpatizantes del presidente electo conservador Fox es comprensible, pues los funcionarios de las ONGs proporcionan la retórica populista en torno a la sociedad civil que legitima las políticas del mercado; y esperan, a cambio, ser nombrados funcionarios para satisfacer ambiciones de ascenso social. Petras advierte que para los intelectuales críticos el problema no es sólo el neoliberalismo que viene de las cúpulas, sino también el neoliberalismo que proviene de abajo, de la sociedad civil (Petras, 2000). Estas críticas deben ser analizadas. Uno de sus problemas es que este autor engloba a todos los grupos como si se comportaran homogéneamente y no percibe las grandes diferencias existentes dentro de este mundo de las ONGs.

Nadie obliga a las ONGs a deambular en el sentido de la democracia. No rinden cuentas sino a las instituciones que les dan dinero. Pero sí hay sectores que van en el sentido de la democracia social. Hay responsabilidad hacia los otros y se abren nuevos espacios institucionales. Frente a la exclusión social buscan espacios de participación. Son un difuso espectro de manifestaciones sociales que pueden influir sobre el Estado. Ciertamente existe el peligro de que los viejos y nuevos organismos de la sociedad civil que encaran los problemas del neoliberalismo sólo funcionen para hacer menos estridentes las contradicciones entre los derechos de la población y las obligaciones relegadas del Estado. Sin embargo, aun en la búsqueda de soluciones inmediatas por parte de estos grupos se va dando una profunda crítica al *statu quo* y a la misma dominación. No se puede negar que se les asigna atender lo más cruel de la exclusión, que la fragmentación no permite que su potencial renovador crezca. Pero las convergencias que se han ido fraguando han hecho que ese confinamiento vaya siendo quebrantado. Las principales características de las ONGs son, aparte de no pretender con su acción conseguir lucro o ganancia, el que no intentan usur-

par ninguna representatividad, que se han ido integrando alrededor de proyectos específicos, que defienden su autodeterminación e independencia, y que se han convertido en un fenómeno de dimensiones muy amplias. Sus mismas necesidades los han ido conduciendo a tejer consistentes redes regionales, nacionales y mundiales. Sus formas son muy variadas y están encaminadas a diversos objetivos. Se entrelazan organismos tradicionales con los más innovadores.

La participación ciudadana puede no entrar en contradicción con el desarrollo neoliberal; es factible insertarla en los planteamientos de la reducción del Estado. Gran número y diversidad de organizaciones populares han buscado además intervenir en la formación de políticas públicas, su ejecución, su control y su fiscalización. Pero también puede propiciar propuestas alternativas. Lo más significativo de este tipo de organismos es su capacidad para crear espacios de encuentro y formación de redes (Guerra, 1997).

Hay movimientos sociales con capacidades para trascender los límites de la democracia política formal. Pueden actuar como mediadores entre sectores sociales desprotegidos y los estados. La relación entre partidos, movimientos y ONGs a la par que conflictiva es muy dinámica. Los grupos subordinados expresan formas ocultas de acción: desde resistencias hasta disidencias. Centran demandas en la dignidad y en la autonomía. Esta clase de movimientos evidencian las contradicciones entre los discursos dominantes de participación política institucional y la exclusión producida por la política económica. Hay agrupamientos que dirigen sus demandas al Estado, pero no a través de los partidos. Los movimientos más novedosos han sido los de mujeres, de derechos humanos, ecologistas, y por el respeto a diferencias culturales que no están exentos de ser manipulados por los partidos. Los nexos entre movimientos sociales y partidos son altamente cambiantes. Pueden colaborar, formar redes de ayuda e intercambiar ideas. Las demandas de los movimientos sociales han ido cambiando de perfil atendiendo la cultura de la cotidianidad. Se han ido construyendo sistemas colectivos de reconocimiento social, expresión de identidades colectivas nuevas y viejas, de articulación demandas con instituciones estatales. Estas expresiones dificultan la cooptación. Se da un fenómeno de autoexpansión que puede ser garantía de consolidaciones democráticas (Jelin, 1996).

### CONCLUSIONES

Las relaciones entre movimientos y partidos han ido sufriendo grandes modificaciones a lo largo del siglo xx. Con altibajos organizativos la izquierda siempre ha estado ligada a diversos movimientos populares. El partido de Estado integró como una arena de resolución de conflictos a los principales grupos regionales posrevolucionarios y estableció un pacto político comandado con mandos centrales. Sufrió una primera modificación al corporativizar organizaciones campesinas, obreras y populares bajo el mando del Estado. El partido de Estado mantuvo a los sectores, estableció burocracias dóciles y centralizó el proceso político en un pacto social totalizante. Pero siempre quedaron espacios no articulados, los cuales fueron creciendo conforme aumentaron las capas medias y la sociedad se fue complejizando. Primero emergió una organización política no corporativizada, ciudadana. Otros partidos entraron en contacto con los grupos obreros y campesinos que trataron de independizarse del control gubernamental. Los resquebrajamientos del partido de Estado fueron incrementándose. Esto dio pie a que se formaran espacios partidistas alternativos. Roto el modelo de sustitución de importaciones y agotado el denominado milagro mexicano, capas medias, estudiantes, obreros y campesinos que trataban de sacudirse la burocratización oficial dieron origen a nuevos partidos de izquierda en la década de los setenta. El modelo neoliberal adoptado a principios de los ochenta fue socavando lo que quedaba del pacto social del partido de Estado. El control electoral se fue deteriorando, al tiempo que grupos opositores avanzaron en sus reclamos por democracia electoral. En la década de los noventa surgieron nuevos grupos en la sociedad civil que fueron llenando espacios dejados por un Estado que renegaba de sus obligaciones sociales. Las demandas de democratización y de participación se incrementaron. La oposición fue creciendo. Así llegó la derrota electoral del partido de Estado en el año 2000 y el inicio de su desmantelamiento. Los partidos pasaron de tratar a los movimientos sociales y civiles como algo propio o como aliados supeditados. Las contradicciones entre partidos y las nuevas expresiones civiles fueron pugnando por espacios autónomos. No obstante, estos mismos organismos civiles han buscado relacionarse con los partidos para consolidar

logros en la transición democrática. Sus relaciones han sido muy contradictorias y a veces antagónicas. Pero hasta en las expresiones en las que pareciera que se pretendiera una vía al margen de los partidos, la relación con éstos no deja de estar presente.

Presiones de organismos de la sociedad civil se han propuesto avanzar en la dignificación de la política y abrir una discusión y lograr prácticas en los partidos acordes a una ética ciudadana. En las elecciones federales del 2000 hubo un mayoritario repudio hacia todo lo que ha significado el PRI. No se trató del triunfo de un partido mayor aliado a uno pequeño; sino de una convergencia opositora que quiso liberarse del peso de un partido de Estado. Hay una gran expectativa de que las promesas de campaña se cumplan. Pero eso va a depender de la correlación de fuerzas. Los grupos civiles por el cambio democrático tendrán que seguir luchando por conseguir sus objetivos. Lo que destaca de esta coyuntura es la conformación de un movimiento plural por el voto útil, y la presencia de varias redes de nuevos organismos de la sociedad civil para establecer compromisos con los partidos. Tiene que consumarse el desmantelamiento del partido de Estado y la configuración de un sistema de partidos democrático y equitativo. Se tiene que hacer efectiva la libertad sindical y el desmembramiento del corporativismo. Falta impulsar una reforma política en la que ya no se escatimen demandas de importantes grupos de la sociedad civil: el reconocimiento legal de las formas directas de democracia; la depuración y desburocratización de los organismos electorales en todo el país para que sean verdaderamente ciudadanos y autónomos; hacer que las campañas políticas y el gasto de los partidos sean menos costosos; conseguir organismos ciudadanizados y profesionalizados autónomos tanto para la estadística nacional, como para la fiscalización del gasto público; que haya clara rendición de cuentas de las gestiones y se introduzcan mecanismos confiables de información pública; democratizar los medios electrónicos de comunicación y conseguir que se respete el derecho a la información; concluir la reforma del Estado; terminar con las formas de compra y coacción del voto; instaurar mecanismos ciudadanos de participación en la toma de decisiones públicas; etc. Muchos grupos de la sociedad están atentos a que no se consolide una partidocracia, a que los partidos se democraticen y sean responsa-

bles en sus ofertas. Habría que evitar que los registros de partidos y agrupaciones políticas se conviertan en prebendas de pequeños grupos sin inserción en la sociedad. Los grupos de la sociedad civil también deben transparentar sus actividades. Es posible lograr una respetuosa relación entre partidos y grupos de la sociedad civil. Si no se consigue que se respeten los derechos de los pueblos indios y su cultura; si no se logra una participativa, eficaz y no clientelista lucha contra pobreza, la transición a la democracia no se conseguirá. Se necesita un gran movimiento convergente que revierta las exclusiones económicas y políticas, y diseñe formas alternativas de una convivencia pacífica, justa, democrática y digna.

Han ido quedando atrás las viejas expresiones colectivas de corte clasista. Éstas se han ido haciendo plurales y reticulares. Cada vez es más polimorfa la organización de la sociedad civil. Crece la exigencia de participación ciudadana y de respeto a la diversidad. Se intentan construcciones orgánicas novedosas; se pretenden cambios institucionales formales con expansión de prácticas democráticas. Se va forjando una cultura de la ciudadanía. Van aumentando los actores frente al Estado en una dinámica de ciudadanía activa. Existe recelo y desconfianza entre organizaciones civiles y partidos. Se utilizan entre sí. Pero buscan formas de interacción respetuosas de autonomías. Aunque pretendan caminos diferentes, constantemente se encuentran. Los partidos irán sufriendo modificaciones que van en detrimento de estructuraciones similares a las viejas empresas o ejércitos y que se van aproximando a las modalidades de redes, muy cercanas a como se organiza la sociedad civil. Pese a conflictos (más agudos cuando perciben que compiten entre sí) las organizaciones de la sociedad civil y los partidos no tendrán iguales funciones en la sociedad; pero no podrán ignorarse. Se requieren mutuamente, y tienen que encontrar adecuadas cooperaciones. La principal diferencia entre los partidos y las nuevas organizaciones de la sociedad civil es que estas últimas no quieren directamente el poder, sino que éste sea ejercido teniendo en cuenta la voz y la participación ciudadana. La mediación ciudadana ha dejado de ser exclusividad partidista. Hay todo un trabajo de educación cívica en contra de tradiciones corporativas y clientelares. Se pretende que no todo tenga que pasar por los partidos. Se les reconoce un espacio específico de representación política acotada; pero no se les otorga

la exclusividad. Hay una estructura flexible, énfasis en el hábitus ciudadano, y construcción de actitudes cívicas. Nuevas redes de organismos de la sociedad civil llegan a poner en tela de juicio la estructuración del poder imperante. Se configura una manera diferente de ver y vivir la vida.